

Nicaragua: elecciones y las perspectivas de un gobierno neosocialdemócrata

Mario Trujillo Bolio

El resultado de los comicios del 25 de febrero de 1990 en Nicaragua causó particular sorpresa en la comunidad internacional.

La jornada electoral era crucial para las fuerzas políticas participantes, pues una vez llevada a cabo se podrían encarar desde una nueva perspectiva los viejos problemas que afectan a la sociedad nicaragüense. Para el sandinismo, que durante la última década había logrado dirigir el proceso revolucionario, la contienda en las urnas abría las posibilidades para entrar en un nuevo terreno político, buscar la estabilidad económica, la pacificación del país, y tener una mayor presencia en las negociaciones sobre la paz en Centroamérica.

Sin embargo, el voto favorable a Violeta Barrios viuda de Chamorro para ocupar la presidencia de la República, y el hecho de que la Unión Nacional Opositora (UNO) cuente ahora con una mayoría relativa de diputados en la Asamblea Legislativa, modifica necesariamente el escenario político y social del país.

En tal contexto, me propongo analizar dicho proceso electoral, que al parecer se ha convertido en un modelo a seguir en el ejercicio de la democracia en América Latina. En ese sentido, centraremos nuestra atención en aquellos aspectos que en el nivel de la región centroamericana influyeron de alguna manera en la lógica de tales comicios electorales. Destacaremos también la situación económica de Nicaragua, particularmente en los últimos tres años y lo que va de 1990.

En cuanto a las fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral, la línea a seguir se centrará en las características que guardaron las campañas políticas de la UNO y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya que ambas organizaciones se distinguieron por ser las más importantes en términos políticos.

Finalmente, presentaremos un balance de las perspectivas que se abren a la UNO para los próximos seis años de su gobierno, y cuál sería la participación política del FSLN desde la oposición, tanto en el parlamento como en el movimiento de masas.

I. El FSLN y el conflicto centroamericano

Uno de los elementos que posibilitan la comprensión del controvertido resultado electoral en Nicaragua, es el estudio del desarrollo de las negociaciones de paz realizadas por el gobierno sandinista y los demás países centroamericanos.

Las conversaciones sostenidas entre los mandatarios de la región, en Costa Rica, el 2 de agosto de 1987, conocidas como Esquipulas II, marcaron un avance positivo. El diálogo y la negociación fueron más allá del simple protocolo entre gobernantes, sobre todo por el consenso que lograron en lo que se refiere a la pacificación en Nicaragua y El Salvador.

Estos primeros acuerdos se distinguieron por una preocupación común entre los presidentes centroamericanos tocante a resolver los problemas que se desprenden de los conflictos armados en El Salvador y Nicaragua, a partir de la propia iniciativa de sendos mandatarios. No hubo aquí mediación de lo que fue el Grupo Contadora, ni una sumisa aceptación por parte de los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala y

Costa Rica de los postulados establecidos en el documento de Santa Fe, donde se expresa la política exterior estadounidense bajo la estrategia republicana.¹

En cuanto a Nicaragua, de Esquipulas II se desprende la posibilidad de que el gobierno sandinista y las fuerzas contrarrevolucionarias (la contra) iniciaran los primeros contactos para la negociación política con vistas a terminar con el prolongado enfrentamiento bélico. Asimismo, se perfiló la apertura de espacios políticos para una posible participación de las fuerzas que, entre 1979 y 1981, fueron copartícipes junto con los sandinistas, en el proyecto de la Junta de Reconstrucción de Nicaragua. Es decir: se abría la posibilidad para que empresarios, partidos liberales o conservadores, y sectores de la Iglesia Católica —que hoy se agrupan en el seno de la UNO bajo el liderazgo de Violeta Barrios de Charromo— regresaran a Nicaragua y participaran en la política nacional.

A partir de 1988, las reuniones entre los jefes de Estado centroamericanos se intensifican y sus planteamientos tienen un reconocimiento internacional significativo; lo anterior trasciende hasta alcanzar el aval de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

En este sentido destacaron las pláticas en Sapoá, Honduras, en marzo de 1988, por el anuncio, por parte del gobierno sandinista, de una futura realización de elecciones plurales en Nicaragua, con igualdad de derechos para todos los partidos políticos, sin descartar a las fuerzas que hacían proselitismo desde el exterior contra la revolución. Lo anterior significó la disposición del sandinismo a crear las condiciones para que la burguesía nicaragüense opositora y sectores medios de la población contrarios al proceso revolucionario participaran en la vida política del país, en medio de un diálogo nacional que no había logrado fortalecerse en las elecciones de 1984.

Todo ello tuvo una estrecha relación con un nuevo clima político para las elecciones propuestas para junio de 1990. Como ejemplo de lo anterior puede citarse que la Asamblea Legislativa de Nicaragua, en ese entonces hegemónizada por los sandinistas, decide discutir la ley electoral que tenía vigencia desde 1984. Los debates dieron lugar a una reforma electoral sin precedentes en la historia política nicaragüense. Las modificaciones que ésta conllevó permitieron un juego flexible de las fuerzas políticas interesadas en participar en el proceso electoral, y la posibilidad de establecer alianzas para registrar candidatos comunes a la presidencia, así como para diputados y concejales.

En esto último valdría la pena detenerse, pues el marco jurídico de la reforma electoral fue lo que permitió el libre juego de las fuerzas políticas contendientes. En efecto, la ley electoral de 1984 establecía como requisito para registrar un partido político la presentación de 150 mil firmas de ciudadanos. Con la modificación de agosto de 1988, sólo se establece como requisito que el partido tenga una estructura orgánica compuesta cuando menos por 851 miembros o funcionarios afiliados. Aquella modificación a su vez ordena que las fuerzas políticas deberán registrarse bajo la siguiente estructura: nueve militantes que constituyan la dirección nacional; nueve directivos para cada una de las direcciones regionales de que consta la propia división socioeconómica del país. Esto suma un total de 53 personas; además, seis militantes por departamento, lo cual implica 84 miembros más; y en cada uno de los 139 municipios del país, al menos cinco militantes, esto es, 695 representantes municipales.²

A partir de tal disposición es posible entender la razón por la que en las elecciones de febrero de 1990 participaron un total de 22 partidos políticos,³ de los cuales ocho recibieron registro en sólo seis meses (del

27 de noviembre de 1988 a mayo de 1989)⁴, y que en la conformación de la UNO estuviera implícita una alianza de 11 partidos políticos en el registro de candidatos para diferentes niveles.⁵

De igual manera, con esta reforma electoral, el Consejo Supremo Electoral Nicaragüense obtuvo un mayor peso político, ya que le confirió autonomía en las funciones de supervisión y legitimación de las campañas electorales, de la participación y tiempos en los medios de comunicación, en el subsidio a los partidos, así como en la dictaminación y recuento final de los votos emitidos.

En otro encuentro importante de los presidentes centroamericanos — la reunión de Tela, Honduras, el 7 de agosto de 1989 —, la parte sandinista manifestó en la mesa de negociaciones su compromiso de apertura política y anunció un avance concreto en ese camino que consistía en la amnistía a los mercenarios, misma que fue decretada por la Asamblea Legislativa de Nicaragua el 15 de julio de ese mismo año.

Como puede observarse, el gobierno de Daniel Ortega decidió contrarrestar la ofensiva estadounidense sobre la Revolución Sandinista mediante una estrategia de apertura política. Dicha ofensiva se concretó prácticamente en cuatro niveles: el apoyo logístico-militar a la "Contra", sin respetar la soberanía de Honduras; el asesoramiento político y el apoyo financiero a partidos de oposición, sobre todo a las tradicionales fuerzas conservadoras y liberales; el mantenimiento de un bloqueo económico hasta el término de las elecciones; y el ejercicio de una presión sobre las instituciones financieras internacionales para que no otorgaran préstamos al gobierno sandinista.

En la reunión de Costa del Sol, en El Salvador, los sandinistas, empeñados en lograr la pacificación de su país incluso antes de las elecciones, anunciaron la anticipación de éstas para el 25 de febrero. De igual modo,



aprovecharon el interés mostrado por sendos organismos internacionales (la ONU y la OEA) en los avances alcanzados durante las negociaciones, e hicieron explícita una invitación oficial a ambos para que participaran como observadores durante todo el proceso electoral.

La política exterior del gobierno de Daniel Ortega transitó, sin embargo, por decisiones muy difíciles. Un ejemplo de ello fue la reunión de San Isidro Colorado, en Costa Rica, el 16 de diciembre de 1989. Los acuerdos fueron motivo de polémica, por haber aceptado Ortega la condena a las acciones político-militares del FMLN, y por secundar el apoyo que todos los presidentes asistentes otorgaron al gobierno salvadoreño de Cristiani respecto de una solicitud hecha por éste ante la ONU, a través de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), para la desmovilización de la fuerza guerrillera en El Salvador.

Esta reunión en Costa Rica fue de las más tensas; Nicaragua fue objeto de presiones para que retirara la demanda de juicio condenatorio ante la Corte de la Haya, en la que estaban implicados Honduras y Estados Unidos por el apoyo logístico y militar a los contras para sus actividades en territorio nicaragüense.⁶ En dicha reunión fue evidente que, en bloque, los presidentes de Costa Rica y Guatemala avanzaron para contrarrestar cualquier posible influencia del FSLN y del FMLN en la negociación de paz en Centroamérica.

II. Un ajuste económico doloroso

También los elementos de tipo económico tuvieron necesariamente que ver con el panorama electoral. La crisis estructural de la economía nicaragüense fue doblemente golpeada: primero, por la negativa de instituciones internacionales de crédito a otorgar financiamiento; y después, por el bloqueo de mercancías que el gobierno estadounidense puso en marcha, y que se hizo sentir en el comercio exterior de Nicaragua.

Sectores importantes de la población de bajos recursos vieron mermados notablemente sus niveles de vida en los últimos tres años, y en una actitud espontánea y poco razonada optaron, con el "voto de castigo", por una salida a sus angustias económicas, en un proyecto diferente al propuesto por los sandinistas antes y después de las elecciones.

Todo hace necesaria una reflexión y el conocimiento exacto de cuál fue la propuesta que el gobierno de Ortega planteó a la sociedad nicaragüense para responder ante el grave deterioro económico del país, mismo que, a fin de cuentas, tuvo un efecto similar al de la guerra misma.

El gobierno sandinista encontró serios obstáculos para subsistir ante la agresión económica, y para dar

INDICADORES ECONÓMICOS DE NICARAGUA (1986-1989)

	1986	1987	1988	1989	Acumulado (1980-1990)
Producto Interno Bruto (%)	-1.0	-0.7	-8.0	-3.0	-9.6
Inflación (%)	747.3	1347.9	33657.3	1689.1	—
Salario real (%)	-30.1	-34.3	—	—	-60.6
Exportaciones (millones de dólares)	294	328.0	237.0	292.0	—
Deuda externa (millones de dólares)	5760.0	6270.0	7220.0	7570.0	7570
Déficit público (según porcentaje del PIB)	17.7	16.7	24.0	—	—

Fuente: Informes de la CEPAL, "Centroamérica: Evolución económica en 1989" (27 de febrero de 1990); "Balance preliminar de la economía de América Latina y El Caribe 1989", diciembre de 1989.

solución a los desajustes que tuvieron lugar en diferentes ámbitos productivos.

En el cuadro anterior se ilustran las condiciones económicas del país entre 1986 y 1989.

Las cifras sobre la inflación galopante, provocaron en los hechos un desorden de rubros productivos que duró desde 1980 hasta 1986. En ese caso se vieron tanto la agricultura de exportación como la de granos básicos para consumo interno.

En lo relativo a la deuda externa, su proporción es desastrosa en términos de pago de réditos para un país dependiente como Nicaragua. Lo dramático de este débito es que incluye los adeudos de la época de Somoza y los contraídos desde el 19 de julio de 1979 hasta la fecha, sin que cupiera alguna alternativa de renegociación que permitiera ciertos respiros en el pago de intereses.

Sin duda fue una situación compleja. Las opciones del gobierno sandinista fueron promover la llamada economía mixta, sostener el mercado libre, buscar préstamos del exterior (que se distinguieron por pequeños y limitados); y particularmente, para febrero de 1988, se recurrió a un programa ortodoxo de estabilización económica que se adecuó a las normas propuestas por el Fondo Monetario Internacional para que los países latinoamericanos enfrentaran la recesión económica y el pago de la deuda externa durante la década de los ochenta.

El programa de estabilización económica suponía enfrentar los males de la estructura productiva. Recordemos que el país vivió a partir de 1987 un agravamiento en el alza de los precios al consumidor; el salario real en el campo y la ciudad, a pesar de las alzas decretadas, no se mantuvo en los niveles mínimos para la reproducción

de la fuerza de trabajo. El déficit de la balanza comercial se incrementó entre 1988 y 1989; esto hizo que los recursos presupuestales del Estado fueran mínimos. Los gastos para enfrentar a la contrarrevolución siguieron significando un 60% del mismo presupuesto nacional, y en contrapartida, el conflicto bélico arrojó un saldo de 12 mil millones de dólares en pérdidas. Para rematar esta situación, se puede sumar a esto los daños directos que dejó en octubre de 1987 el huracán Joan, que fueron valuados en 700 millones de dólares.

El gobierno sandinista, ante la ausencia de divisas y la descapitalización de las empresas privadas, consideró que sostener una economía mixta podía ser uno de los pilares fundamentales para enfrentar la crisis. En términos políticos esto también significó mantener una economía de mercado, lo cual, por cierto, para estas fechas comenzó a plantearse también en el seno de los países de la Europa Central, como resultado de la Perestroika promovida por el gobierno soviético.

No obstante, las fuerzas socioeconómicas que constituyeran la inversión mixta hasta abril de 1990 en Nicaragua eran el Estado, a través de los capitales confiscados al llamado "grupo económico Somoza", y los inversionistas privados vinculados con la agroexportación y el comercio, que siguieron participando en la economía gracias a la rentabilidad que confería a los negocios el subsidio gubernamental. Pero a final de cuentas, fue el sector privado el que más beneficios obtuvo de la economía mixta, pues promovió la fuga de capitales, la especulación y el mercado negro de mercancías.

Las repercusiones se hicieron sentir de manera marcada en el campo, entre los pequeños y medianos productores, y en las cooperativas agrícolas: para ellos el crédito fue limitado, además tuvieron serias dificultades por la escasez de divisas, para comprar maquinaria, semillas, equipo y fertilizantes.

En los primeros años de la revolución se verificó un avance en lo que respecta a los rubros de educación, salud, recreación y transporte público; pero las políticas del programa de estabilización económica restringieron radicalmente los subsidios sociales, con lo cual se detuvo dicha evolución.

En un análisis que hizo Carlos Vilas, previo a las elecciones, señaló las consecuencias que tuvo el severo ajuste sin financiamiento. A los cinco meses de haberse decretado la reforma monetaria, los efectos comenzaron a sentirse:

A partir de junio (de 1988) comenzó a aplicarse un programa riguroso de ajuste: fuertes devaluaciones dirigidas a unificar el tipo de cambio oficial con el mercado paralelo, restricciones crediticias, indexación del tipo de interés y de los principales precios de la economía a la evolución del tipo de cambio, recortes en el empleo público y en las inversiones. Se llevaron a cabo fuertes recortes presupuestarios en el gobierno central y empresas descentralizadas, y en el programa de inversiones públicas, con el fin de reducir al máximo las emisiones inorgánicas. La inversión pública cayó en más del 66% entre 1987 y 1989 en valores reales. A partir de junio 1988 se eliminaron prácticamente todos los subsidios, con un impacto fuerte en los precios y los costos.⁷

El apoyo social que los sandinistas mantuvieron durante una década, por su prestigio en la lucha revolucionaria, sufrió serias cuarteaduras cuando se dispuso a realizar los fuertes recortes presupuestarios. Esta determinación, para James Petras, tuvo un costo político fundamental:

Las políticas económicas socavaron a la base de trabajadores pobres y de la clase obrera de la revolución y expandieron vastamente las capas especulativas del pequeño comercio vinculadas a la *economía liberal* y con afinidad a la política contrarrevolucionaria.

El programa de *estabilización* confirmó el poder de las élites agroindustriales y desestabilizó aún más los ingresos familiares de los trabajadores pobres. La política económica sandinista se jugó en el terreno de la clase capitalista y no es sorprendente que hayan perdido el apoyo de sectores sustanciales de la clase trabajadora y de los pobres sin ganar el apoyo de las clases media y propietaria.⁸

Tendrá que hacerse un balance más profundo para analizar la incidencia de la variable económica sobre el voto. Sin embargo, puede adelantarse que la psicosis de guerra vivida de 1977 a 1979, y que continuó de 1982 a 1990, se reflejó en los resultados electorales. Puede hallarse una explicación más clara del malestar cotidiano y del rechazo al voto sandinista, en diferentes estratos de la sociedad, en aspectos como la degradación de las condiciones sanitarias, de los niveles de alimentación, así como la permanente incertidumbre en las fuentes de trabajo. La dieta de los trabajadores nicaragüenses se reducía a una dotación de arroz, frijol, maíz y aceite; contaban con una muda completa de ropa anual; tenían que buscar empleo transitorio en las fábricas que no cerraran, laborar en los cortes estacionales o ingresar en el ejército sandinista.

III. La UNO y el FSLN, dos campañas políticas singulares

Anteriormente señalamos que en las elecciones del pasado 25 de febrero contendieron 21 partidos políticos. La pluralidad ideológica de los programas partidarios fue inédita en la historia contemporánea de Nicaragua. Diversidad de opiniones sobre los problemas nacionales, libertad para escindirse en tendencias o corrientes políticas y formar nuevos partidos o alianzas, y buscar financiamiento externo para la propagan-

da, fueron hechos cotidianos en la cultura política de los nicaragüenses durante 1989 y los dos primeros meses de 1990.

El proyecto de la UNO

En el juego de alianzas y acuerdos políticos que tuvieron lugar en los comicios, la Unión Nacional Opositora destaca particularmente por los intereses y principios programáticos de los once partidos registrados y las tres tendencias partidarias que en conjunto la conforman. Sobresalen en esta alianza partidos liberales, conservadores, socialdemócratas, socialcristianos y de izquierda tradicional.

Para las elecciones que se celebraron el 4 de noviembre de 1984, solamente algunos núcleos de estas fuerzas políticas presentaron candidatos. En ese entonces, ninguno de los partidos: Conservador Demócrata, Liberal Independiente, Social Cristiano, Socialista y Comunista de Nicaragua, lograron superar el 15% de los votos emitidos.⁹ Lo reducido del porcentaje puede explicarse en buena medida por la falta de consenso para lograr una candidatura común que se opusiera al sandinismo, pues lo que fue la Coordinadora Democrática Nicaragüense no pudo constituirse en un frente unitario, ni menos en otra propuesta electoral, en vista de que no registraron a los candidatos Arturo Cruz, del Partido Liberal Constitucionalista, y Adán Fletes, del Partido Social Cristiano, para Presidente y vicepresidente, respectivamente.

La oposición al sandinismo siguió un proceso diferente en los comicios electorales de 1990. Constituir ese tejido tan endeble que era la UNO requirió de una negociación difícil, llena de tensiones, pero por demás ingeniosa. Los artífices fueron la embajada estadouni-

dense en Managua, los políticos de viejo cuño liberal y conservador, dos grupos de empresarios nicaragüenses, e incluso sectores que se levantaron en armas contra el Ejército Popular Sandinista.

En esta heterogeneidad de fuerzas sobresale la beligerancia de una tendencia neoliberal que, por cierto, fue la que dio consistencia a la plataforma programática y discurso a la propaganda de la campaña política. Asimismo, propuso que para la presidencia era necesaria una figura con carisma y un símbolo que representara la historia opositora desde tiempos de Somoza, y opuesta al propio sandinismo.

Esta fórmula fue integrada por el Partido Social Demócrata, el Movimiento Democrático Nicaragüense, los empresarios aglutinados en la Comisión para la Reconstrucción y el Desarrollo de Nicaragua (CORDENIC), y marginalmente, por el Partido Socialista de Nicaragua. De este grupo surge un proyecto alternativo de la burguesía nicaragüense que busca atraer hacia sí a sectores amplios de la población y de la Iglesia Católica, con vistas a un nuevo proyecto de orden social.¹⁰ Sus líderes son Alfredo César Aguirre, un político experimentado en asuntos electorales desde tiempos de la dinastía somocista, y Antonio Lacayo, yerno de Violeta Barrios viuda de Chamorro, quien en poco tiempo se ha perfilado como ideólogo y negociador en el interior de la UNO, y para manejar acuerdos con otras fuerzas políticas.

Al proyecto de la UNO se integran otros dos sectores que destacan por su ferviente oposición a la Revolución Sandinista: por un lado, los grupos de liberales que a pesar de posiciones discordantes quedaron liderados por Virgilio Godoy; y por el otro, el grupo constituido por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), representado por Enrique Bolaños Geyer.

La contienda para designar la precandidatura a la vicepresidencia se dividió entre estos sectores. El propio embajador estadounidense, pese a un abierto rechazo del COSEP, intervino para que el exministro del trabajo, Godoy, quedara en la fórmula electoral junto con Violeta Barrios de Chamorro.

En cuanto a los social-cristianos y comunistas, su peso político en el interior de la sociedad nicaragüense los llevó a integrarse a la UNO, con miras a alcanzar posibles escaños en el Congreso.

Como se podrá apreciar, la UNO tuvo la posibilidad de registrar candidatos con un cierto respaldo social en diferentes niveles. Cabe subrayar también que en el proceso mismo de la campaña electoral, el apoyo logístico y financiero del Presidente George Bush a la UNO fue un elemento de suma importancia. Al principio, los distintos sectores de la UNO contaban con recursos económicos propios, además del presupuesto que por ley les otorgó el Consejo Supremo Electoral así como el apoyo implícito del periódico La Prensa, mismo que se convirtió en el vocero oficial de la Unión. Sin embargo, los nueve millones de dólares que aportó el gobierno norteamericano a la candidatura de Barrios Chamorro reforzaron notablemente la propaganda antisandinista y la presencia física y en los medios de comunicación de la UNO en todos los rincones del territorio nicaragüense, así como la propaganda a nivel internacional.¹¹

En el discurso propagandístico de la UNO durante la campaña pudo advertirse una propuesta política que trascendió en importantes sectores de la población.¹² La insistente propuesta de un Gobierno de Salvación Nacional fue la prioridad de los puntos programáticos. De él se desprenden las frases de una "necesaria unidad de la familia nicaragüense", o el argumento de terminar con la guerra que había produ-



cido tantos daños y creando traumas a los hogares del país.

El proselitismo de la UNO tuvo en el centro de ataque político al Frente Sandinista, como culpable del mal que padecía Nicaragua. Se le acusó de totalitario, militarista, promotor de una nueva dictadura y responsable de la ruina económica en que se encontraba el país.

La propuesta de un nuevo gobierno en los discursos de Violeta Barrios de Chamorro era que la oposición cívica al sandinismo tenía que partir de la reconciliación nacional de los nicaragüenses a través de una paz digna y una estabilidad económica. Fueron insistentes las consignas sobre la abolición del servicio militar obligatorio, la amnistía a los presos políticos, la supresión del servicio militar y la reducción de las fuerzas armadas. De igual modo tocaba el tema de la participación activa de

los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. En el caso del primero proponía terminar con la centralización política y con la reelección presidencial.

En cuanto al proyecto económico, la tesis fue clara: se dirigió a cuestionar la política de participación estatal en la economía, a promover la libre empresa, la incorporación de Nicaragua a diferentes bloques económicos internacionales, y subrayó el fortalecimiento de integración centroamericana.

De ahí el énfasis puesto por los candidatos de la UNO en que se respetara en el país el derecho a la propiedad y herencia, que terminaran las confiscaciones, se enfrentara el burocratismo, se solucionaran los problemas de la deuda externa, se otorgaran garantías a la empresa privada, y se diera cabida a una ley de inversiones extranjeras.

Planteamientos electorales y la táctica política del FSLN

En la consigna "¡todo será mejor!", el Frente Sandinista sintetizó su propaganda política para participar en los comicios que buscaban la reelección del presidente Daniel Ortega.

En el proceso electoral de 1984, los resultados en favor del FSLN le permitieron a éste asumir la dirección del poder ejecutivo y el legislativo. Los 735 967 votos para los sandinistas significaron el 67% de los sufragios emitidos para presidente, y la mayoría necesaria en la Asamblea Legislativa para llevar adelante sus propuestas de gobierno.¹³

El gobierno de Ortega en el último año continuó arrastrando los problemas ocasionados por la guerra y el deterioro económico, situaciones que se convirtieron en serios obstáculos para mantener el porcentaje de las votaciones alcanzadas en 1984.

De ahí, entonces, que el propio balance de la plataforma política del sandinismo marcara una tendencia a mantener tanto los principios programáticos planteados desde su misma fundación como las instituciones promovidas en el proceso revolucionario; y ante la coyuntura electoral, sostuvo la promesa de buscar en todo lo posible un alto al fuego, así como los mecanismos tanto internos como externos para salir del estancamiento económico.

La defensa de la soberanía nacional, el no alineamiento internacional y la solución negociada a los conflictos bélicos en Centroamérica, fueron base de la política exterior del FSLN; todo ello fue manifestado durante la campaña.¹⁴

Tras el derrocamiento de la dictadura somocista, el FSLN fue aplicando toda una serie de medidas para desarrollar lo que se denominó la institucionalización de la Revolución.

Las instituciones que se crearon dieron cuerpo a un nuevo Estado con funciones diferenciadas entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se constituyó en un primer momento el Consejo de Estado, que después pasó a ser la Asamblea Legislativa; y se originó un cuarto poder: el Consejo Supremo Electoral, con funciones propias. Una nueva Constitución de corte liberal le dio carácter jurídico al llamado Ejército Popular Sandinista, y a otros organismos de defensa, seguridad e inteligencia nacional, como el Ministerio del Interior. La guerra misma había provocado el virtual crecimiento de estas instituciones estatales, e incluso reclutó a un número mayor de elementos, a través del Servicio Militar Patriótico, para contrarrestar los ataques de la Contra.

Sobre este asunto, en su campaña política, el FSLN propuso a la ciudadanía mantener las fuerzas armadas "...en tamaño a las necesidades de la defensa", y la

intención de reducir la cantidad de jóvenes en las fuerzas armadas. Dicha situación era difícil de aceptar para una nueva generación de votantes que no habían participado directamente en la lucha armada contra el somocismo.

Para los sandinistas este aspecto se convirtió en una razón de Estado; dejarlo de lado significaba poner en juego su propia sobrevivencia política; se llegó a plantear incluso la necesidad de continuar con la profesionalización y especialización técnica de sus cuadros en el seno del ejército.

Otra de las líneas de acción propuestas por el FSLN, consistió en dar continuidad a los proyectos que aún no lograban consolidarse; pero en cuanto al proyecto económico, fue evidente que se mantendría la política de ajustes. Los puntos de la plataforma indicaban un sostenimiento de la economía mixta, de la propiedad privada, de las cooperativas de producción, y el reforzamiento de lo que se denominó como Área Propiedad del Pueblo, en la que aún había esperanzas de autogestión obrera de las empresas.

También se plantearon metas que, por su contenido, parecían muy difíciles de alcanzar, y posiblemente generarían la crítica de la oposición de izquierda y derecha. Se hizo énfasis en que podría alcanzarse una tasa de crecimiento anual del 5%, cifra que no es posible en las condiciones en que se encuentra cualquiera de los países latinoamericanos.

No obstante, en términos de apertura política los sandinistas fueron fieles a sus planteamientos. En la práctica, antes y durante el proceso electoral mismo, el FSLN garantizó la democracia participativa y la pluralidad de ideas, el respeto a las creencias religiosas; a la autonomía municipal y particularmente a las formas específicas de gobierno de las regiones de la Costa Atlántica; al desarrollo cultural de las distintas etnias, y la promoción de una educación bilingüe y bicultural.

En aras de mantener la Revolución Popular Sandinista, la plataforma política propuso continuar con el fortalecimiento de las garantías sociales. Se buscó que los logros revolucionarios que empezaron a ser golpeados por el programa de choque se reestablecieran luego de superar los efectos de la guerra. Para esto se anunció la adquisición de más unidades para el transporte público; el sostenimiento de la gratuidad de los servicios médicos; el fortalecimiento de los programas de vivienda; la seguridad alimentaria; la ampliación de la cobertura de la educación en sus diferentes niveles científicos y tecnológicos.

En esta perspectiva se hicieron planteamientos para la clase trabajadora: un nuevo código del trabajo, junto con una ley que permitiera la participación de la clase obrera en las empresas. En cuanto al desempleo y los bajos salarios, se advertía una política laboral más racional encaminada al logro de mayores fuentes de trabajo y a mantener las percepciones de los trabajadores de acuerdo con los niveles necesarios para la subsistencia.

El cierre electoral

En cuanto a la evolución de las campañas electorales, ambas fueron sin duda peculiares¹⁵ por la actividad proselitista de los candidatos y por las nuevas formas de propaganda que incorporaron en su propaganda política.

El candidato Daniel Ortega dejó el traje verde olivo de "comandante de la Revolución", y en jeans y camisa floreada, bajo la figura del "gallo ennavajado" llevó sus proclamas a la población. Se relacionó con todos los sectores nicaragüenses, por todos los medios posibles: a pie, a caballo, en autobús, automóvil y helicóptero, logró estar presente en las plazas, puertos,

barrios, vecindades, comarcas, cuarteles, rancherías, centros de producción y comunidades campesinas a todo lo largo y ancho de Nicaragua. Los mensajes y puntos de vista del sandinismo fueron conocidos ampliamente en concentraciones, marchas, por radio, prensa y televisión.

Violeta Barrios de Chamorro cumplió progresivamente los requisitos para presentar una fuerte candidatura. Sobresalió el carisma de la esposa y ahora viuda del promotor de las libertades públicas. Pedro Joaquín Chamorro. A pesar de que esta mujer, con sus 60 años a cuestas, sufrió en plena campaña una fractura en una de las rodillas, eso no fue impedimento para continuar, lo cual le granjeó admiración entre sus seguidores. Y su popularidad se fue reflejando paulatinamente. Por ejemplo, la gente bautizó como violetamóvil al vehículo en que se movilizó la candidata de la UNO durante su campaña.

Este automóvil improvisado pudo llegar si no a los más distantes lugares de la geografía del país, sí a puntos estratégicos para atraer el voto opositor en algunos sitios aún no influidos por el sandinismo. Esta campaña tuvo un marcado estilo estadounidense, con logotipos en los automóviles, camisetas, llaveros, gorras, globos y bailes en los que fueron contratados artistas extranjeros de fama y de moda en los países latinoamericanos.

El seguimiento de las actividades de ambos candidatos durante el mes de febrero de 1990 indica un proceso lleno de tensiones, de polaridad entre los dos principales contendientes, y predicciones electorales con poco margen de diferencia.

El FSLN terminó su campaña insistiendo en su propuesta de apertura política, y pasó a indultar a presos políticos y de guerra. El 9 de febrero habían salido de la cárcel mil quinientas personas, acusadas de participar en

la contrarrevolución, y fueron puestos en libertad 39 guardias somocistas.¹⁶

Ya para estos días cobró relevancia en el proceso electoral la participación de los observadores internacionales que constatarían el respeto al voto entre los nicaragüenses. En un primer momento, el grupo lo conformaron representantes de la OEA, la ONU, una comisión de estadounidenses encabezada por el expresidente James Carter, y para el día de las votaciones llegarían representantes de diferentes instituciones religiosas, partidos políticos y gobiernos de diversas partes del mundo. La participación de los observadores en las elecciones cumplió una función destacada sobre todo para corroborar la credibilidad de las mismas a nivel internacional,¹⁷ pues en el ambiente estaba fresca aún la intervención norteamericana en Panamá, y el pretexto de fraude electoral podía ser la pauta para que se repitiera en Nicaragua.

A los pocos días de efectuarse las votaciones en Nicaragua, sobresale la postura de congresistas estadounidenses y del Presidente Bush al respecto. El 13 de febrero, el senador demócrata Stephen Solarz declaró que las elecciones del 25 de febrero serían "justas, limpias y honestas", y que su país estaría dispuesto a reconocer al vencedor y normalizar las relaciones con Nicaragua; se llegó a contemplar entonces la derogación del bloqueo económico y comercial impuesto por Washington a Nicaragua desde 1985.

El 15 de febrero, el propio Bush,¹⁹ en declaraciones a la prensa manifestó que descartaba una invasión a Nicaragua, aun si los sandinistas obtenían el triunfo en los comicios.

Es importante hacer hincapié en estas declaraciones, pues también en el caso de las diferentes encuestas realizadas por instituciones privadas estadounidenses, nicaragüenses (y por el mismo gobierno sandinista), en

general se le daba un porcentaje mayor de votos a Daniel Ortega respecto de Violeta Barrios de Chamorro. Sin embargo, hubo otras encuestas a las que no se prestó atención, que le daban el triunfo a Violeta Chamorro. En un destacado balance al respecto, Gregorio Selser¹⁸ comparó ambos grupos de encuestas:

...las siguientes cuatro daban el triunfo a la UNO: la costarricense Borge y Asociados, por contrato para la Fundación Manolo Morales, daba 51.7% a Chamorro y 42.3 a Ortega; la venezolana Doxa, Instituto de Opinión Pública, para Doxa, daba respectivamente y en el mismo orden las cifras de 48.8 y 39.3%; Vía Cívica, para la NED (National Endowment for Democracy, parcialmente fachada de la CIA), 59.3 y 30.2%; y la citada Borge y Asociados, que semanas antes acertó en su pronóstico sobre el triunfo de Rafael A. Calderón Fournier, ahora para *La Prensa* daba 54.3 y 38.6%. Esta última fue la que más se acercó al resultado y la publicó *La Prensa* el 21 de febrero, cuatro días antes de la elección. La estadounidense Greenberg-Lake en unión con la nicaragüense Itzani, por contrato con Hemisphere Initiatives, daba 61.4% a Ortega y 28.9 a Chamorro; ECO, asociada a la UCA (Universidad Católica de Nicaragua), daba respectivamente 73.2 y 23.2%; la estadounidense Bendixen-Schon/nicaragüense Logos, para la red Univisión de Estados Unidos, 57.6 y 38.1%; una más de ECO/UCA, 67.9 y 28.4%; y la norteamericana Belden-Russonelo/nica Itzani, para el Washington Post/TV ABC News, daba 57.1% y 38.1, respectivamente.

Por otra parte, al iniciarse la segunda quincena de febrero comenzó a informarse que la UNO prepararía el "caos y la anarquía" si los sandinistas resultaban vencedores, pues preveían un fraude electoral. Finalmente, el Consejo Supremo Electoral creó las condiciones para que el domingo 25 de febrero se realizara una jornada electoral sin precedentes en la historia política de Nicaragua.

IV. Nicaragua cambió de rumbo

De un total de un millón 753 mil 912 ciudadanos inscritos con derecho a voto, se presentaron a votar un millón 510 mil 838, es decir, el 86.1% de los registrados en el padrón. El total de votos válidos fue de un millón 420 mil 544 votos. En el cuadro siguiente sobresalen los votos y porcentajes obtenidos por cada partido.

UNO	777.552 (54.7%)	51 diputados
PSOC	5.798 (0.4%)	
PLIUN	3.151 (0.2%)	
PRT	8.590 (0.6%)	
FSLN	579.886 (40.8%)	39 diputados
MAP-ML	8.115 (0.7%)	
PSC	11.136 (0.7%)	(Yatama) 1 diputado
PUCA	5.065 (0.3%)	
PCDN	4.500 (0.3%)	
MUR	16.751 (1.1%)	1 diputado

Fuente: Consejo Supremo Electoral. Cifras publicadas una semana después de las votaciones. En *Barricada Internacional*, 10 de marzo de 1990. pág. 6.

Lo inusitado de las elecciones nicaragüenses es también la fuerza que alcanzó la Unión Nacional Opositora en amplias zonas geográficas del país. En el caso del FSLN, aunque resulte paradójico, éste obtuvo triunfos precisamente en las zonas militares que estableció César Augusto Sandino para combatir a la Guardia Nacional y la intervención norteamericana de los años treinta.

Los triunfos por organizaciones políticas en cuanto a las regiones en que está dividido el país son los siguientes: la Unión Nacional Opositora ganó en la región II, que comprende los departamentos de León y Chinandega; en la región III, que corresponde sólo a Managua; en la región IV, con los departamentos de Granada, Masaya, Carazo

y Rivas; en la región V, que abarca los departamentos de Boaco y Chontales; y en la región VI, con los departamentos de Matagalpa y Jinotega.

El Frente Sandinista ganó en la región I, departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia; y en la región IX, departamento de Río San Juan.

En cuanto a las regiones VII, Región Autónoma Atlántico Norte, el FSLN ganó 21 diputaciones; la organización Yatama (Hijos de la Madre Patria) 22; mientras que la UNO sólo ganó dos. En la región VIII, Atlántico Sur, la UNO obtuvo el control del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, con 23 diputados, el FSLN obtuvo 19 y el Movimiento Juvenil Multiétnico tres.

A pesar de que Managua, la capital, y otras cabeceras departamentales están bajo el control de la UNO, el FSLN por su parte conquistó la segunda ciudad más importante del país, León y otras como Ocotal, Jinotepic y San Carlos.

Como podrá observarse en el cuadro de las votaciones, el Movimiento de Unidad Revolucionaria sobresale como tercera fuerza política. Está formado por disidentes sandinistas, quienes al igual que Yatama, lograron una diputación en la Asamblea Legislativa Nacional. El MUR, con sus 16 mil 751 votos, logró tan sólo el 1.1%, cifra que indica su restringida incidencia entre los sectores sociales del país. Los otros siete partidos (PSOC, PLIUN, PRT, MAP-ML, PSC, PUCA, y PCDN) no logran superar el 1% en la votación, lo cual manifiesta una base de apoyo muy pobre.

Resquebrajamiento de la UNO y el nuevo gobierno

El ambiente en la toma de posesión de Violeta Barrios de Chamorro, el 25 de abril, mostró un inicio de gobierno con serias dificultades. Los problemas en el

seno de la organización que la llevó al poder comenzaron a presentarse como polvorín; sobre todo por la repartición de espacios de poder y por la decisión de establecer una alianza temporal con el sandinismo en lo tocante a las fuerzas armadas y posibles acuerdos con el Congreso.

Cuando analizamos en el apartado III el proyecto de la UNO, subrayamos lo endeble que era la alianza entre la diversidad de organizaciones políticas que la componen, pero que se observaban estrechos vínculos en un bloque compuesto por el PSD, CORDENIC, el Partido Socialista y La Alianza Popular Conservadora. Una vez que el gobierno de doña Violeta entró en funciones, el bloque se mantiene, y se consolida frente a una futura desaparición de la UNO.

En efecto, en el nuevo gabinete de gobierno, como en el parlamento, los puestos más importantes para ejercer el poder político fueron repartidos entre los integrantes de este bloque.

Las contradicciones que afloraron durante la última semana de abril y todo el mes de mayo, mostraron que las tradicionales fuerzas liberales encabezadas por el Vicepresidente Virgilio Godoy no son tan trascendentes políticamente como para concederles espacios en el gobierno y el Congreso, más allá de la propia vicepresidencia y de algunas curules en la Asamblea Legislativa.¹⁹

Simplemente, la separación de la estructura de la UNO del Partido Social Demócrata, del Partido Socialista Nicaragüense y de Acción Nacional Conservadora, fue el primer anuncio para la formación de nuevos partidos. En este proceso deberá sobresalir uno que logre hegemonizar la conducción del poder gubernamental durante los próximos seis años.

Antonio Lacayo, al ser nombrado Ministro de la Presidencia, y Alfredo César Aguirre, elegido líder de la Asamblea Legislativa, se convirtieron en los hombres fuertes detrás de la Presidenta Violeta Barrios de Cha-

morro. En Lacayo estará la responsabilidad de dirigir una política económica que ponga solución a la grave crisis del aparato productivo de Nicaragua. En sus manos está el gabinete económico, y se apoyará en un selecto grupo de tecnócratas ubicados en los puestos clave. Particularmente en Silvio de Castro, Ministro de Economía y Desarrollo, y en el Director del Banco Central, Francisco Mayorga.

La tarea de Alfredo César es sobre todo de orden político. Hará mancuerna con la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Miriam Argüello, para enfrentar a la oposición sandinista en el Congreso. El trabajo será espinoso, pues los diputados que apoyan al gobierno de Barrios Chamorro no tienen el porcentaje suficiente de votos como para hacer reformas constitucionales que contrarresten el poder institucional que en 10 años edificaron los sandinistas. El problema que se presentará aquí también es que el desmoronamiento de la UNO se verá reflejado precisamente en el mismo Congreso, hecho que le permitirá al FSLN actuar de una forma más beligerante, en tanto partido más consolidado.²¹

De igual manera, Alfredo César aparece como un coordinador de la política de seguridad del Estado. Su cercanía con el Ministro de Gobernación, el exmilitante sandinista Carlos Hurtado, lo hace evidente. Asimismo, César sobresale en su atención a la política exterior, donde destaca el conflicto de desarme de la Contra a más tardar para el 18 de junio, y una cruzada internacional de apoyo político y económico al nuevo régimen, a través del canciller Enrique Dreyfus, y el militante del PSD y embajador en las Naciones Unidas, Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro buscará a toda costa la privatización de la economía nicaragüense, y la atracción de inversiones de capital foráneo. El levantamiento del bloqueo económico y

comercial no permitirá levantar en el corto plazo el deteriorado comercio exterior de Nicaragua, y la deuda externa se incrementará, pero contará con un nuevo paquete de negociación para el pago de la misma. Este proceso será lento y conflictivo, pues la ayuda ofrecida por el gobierno de Bush a Violeta Barrios de Chamorro es reducida si se le compara con los miles de millones de dólares que requiere el país centroamericano para reactivar su economía.

Perspectivas de la oposición sandinista

El Frente Sandinista, por su parte, se dirige a actuar en cuatro direcciones. La primera se refiere al riesgo de una posible guerra civil. En ese sentido, su insistencia será en continuar influyendo en las fuerzas armadas hasta que no esté completamente desarticulada la Contra, y para enfrentar un eventual surgimiento de grupos paramilitares que pudieran actuar particularmente contra el sandinismo.

La segunda es la batalla en el parlamento, cuyo objetivo será el de frenar cualquier iniciativa del gobierno tendiente a terminar con las instituciones y garantías sociales que se promovieron en una década de Revolución.²²

La tercera será la readecuación de su estructura partidaria y su reorientación ideológica y política. Esto es, establecer si trabajará como un partido de cuadros profesionales vinculados a diferentes sectores de la población, o bien como partido de masas, amplio y sin rigidez en su propia dirección. La dirección nacional del FSLN ha sido clara en su incorporación a la Internacional Socialista; la adopción de algunos planteamientos de esta corriente permitirá conocer, y sin asombro, algunas coincidencias con las propuestas de algunos

grupos del nuevo gobierno, particularmente con el que encabeza Antonio Lacayo.

La última será la relacionada con los organismos de masas que sostiene el FSLN y que actuarán desde la oposición. Entre los trabajadores de las manufacturas, a nivel nacional, inciden en 504 sindicatos y cuentan con 113 mil afiliados,²³ agrupados en la organización obrera más importante: la Central General de Trabajadores (antes Central Sandinista de Trabajadores); entre el campesinado y el proletariado agrícola cuenta con 480 sindicatos y 30 mil afiliados, reunidos en la Asociación de Trabajadores del Campo.

El FSLN está presente en otros sectores, como la Federación de Trabajadores de la Salud, con 23 mil afiliados en todo el país; en la Asociación Nacional de Empleados, con 25 mil afiliados dentro del sector público; y en la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua.

En el pasado proceso revolucionario, la clase trabajadora nicaragüense no pudo aglutinarse en una central única, por existir diferentes corrientes político-sindicales, sin embargo, en un llamado a la huelga nacional, los organismos laborales afiliados al sandinismo podían paralizar las actividades productivas y de servicios en las distintas regiones del país.

En algunas de estas organizaciones, como la de empleados hospitalarios y empleados públicos, antes de que asumiera el gobierno Violeta Barrios de Chamorro, comenzaron a movilizarse en contra de los despidos y por aumento salarial. Esto es tan sólo un antecedente de lo que será un persistente movimiento reivindicativo de los asalariados del campo y la ciudad.

La decisión del expresidente Daniel Ortega y del conjunto de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de encabezar el desfile del Día del Trabajo en Managua,²⁴ indica que el Frente Sandinista recurrirá también a la

movilización de masas para mantenerse como segunda fuerza política organizada de Nicaragua.

Conclusión

Como hemos visto, fueron diversos factores de orden político, militar y económico los que influyeron en los sorprendidos resultados electorales. La política estadounidense de Guerra de Baja Intensidad provocó en siete años graves efectos; el desgaste del pueblo nicaragüense contra la agresión causada por la contra-revolución fue decisivo en el momento de depositar el voto en las urnas; pero a su vez el bloqueo comercial y el ajuste económico en plena contienda electoral, juntos, fueron los que más intervinieron en el triunfo de la UNO.

Para el movimiento popular en América Latina la interrupción del proceso revolucionario en Nicaragua constituye un retroceso significativo. Las perspectivas no son muy halagadoras, pero el FSLN intentará por la vía electoral insistir en recobrar el poder dentro de seis años.

Sin embargo, durante el sexenio de Violeta Barrios viuda de Chamorro puede madurar el proyecto neoliberal de la burguesía nicaragüense para avanzar en la estabilización económica, y conformar un nuevo partido de corte socialdemócrata con una base social que la apoye en futuras elecciones.

Notas

1 En cierta medida, la propuesta de paz en Centroamérica de Esquipulas II se aleja de los postulados propuestos por el documento de Santa Fe II, conocido como "Una estrategia para América Latina en los noventa", que marca particularmente la estrategia del gobierno republicano de los Estados Unidos para influir y obtener más espacios en los distintos gobiernos latinoamericanos. A ese respecto véanse las diferentes propuestas en el documento completo publicado por la revista *Envío*, No. 90, dic-enero 1988-1989, págs. 13-37.

2 Véanse los diferentes aspectos de la reforma electoral de agosto de 1988, en el balance que se hace bajo el título: Nueva Ley Electoral regulando el pluralismo político, en el apartado Una Ley Electoral para la Reconciliación Nacional, en la revista *Envío* No. 88, oct-nov. 1988, págs. 36-38.

3 Los partidos contendientes, de acuerdo con los datos del Consejo Supremo Electoral, son los siguientes: 1. Partido Social Demócrata (PSD); 2. Partido Conservador Demócrata de Nicaragua (PSDN); 3. Partido Alianza Popular Conservadora (PAPC); 4. Partido Nacional Conservador (PNC); 5. Partido Social Conservatismo (PSOC); 6. Partido Liberal Independiente (PLI); 7. Partido Neo-liberal (PALI); 8. Partido Liberal Constitucionalista (PLC); 9. Partido Liberal de Unión Nacional (PLIUN); 10. Partido Social Cristiano (PSC); 11. Partido Popular Social Cristiano (PPSC); 12. Partido Demócrata de Confianza Nacional (PDCN); 13. Partido de Acción Nacional (PAN); 14. Partido Socialista Nicaragüense (PSN); 15. Partido Comunista de Nicaragua (PC de N); 16. Partido Marxista Leninista (PML); 17. Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); 18. Movimiento de Unión Revolucionaria (MUR); 19. Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); 20. Partido Unionista Centroamericano (PUCA); 21. Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN).

4 Los partidos políticos a los que se les dio personería jurídica en el periodo señalado fueron los siguientes: Partido Liberal de Unidad Nacional, Movimiento de Unidad Revolucionaria, Partido Social Conservatismo, Partido Alianza Popular Conservadora, Partido Acción Nacional, Partido Democrático de Confianza Nacional, Partido Nacional Conservador y Partido Neo-Liberal. Fuente: Consejo Nacional de Partidos Políticos de Nicaragua.

5 Los 14 partidos integrantes de la Unión Nacional Opositora fueron: Partido Liberal Constitucionalista, Movimiento Democrático Nicaragüense, Partido Acción Nacional, Partido Popular Social Cristiano, Partido Socialista Nicaragüense, Par-

- tido Nacional Conservador, Acción Nacional Conservadora, Partido Democrático de Confianza Nacional, Partido Comunista de Nicaragua, Partido Neo-liberal, Partido Social Demócrata, Partido Alianza Popular Conservadora, Partido Liberal Independiente, Partido Integracionista de América Central. El listado de los presidentes o secretarios generales puede verse también en el Programa de Gobierno presentado por la UNO, que editó en un número especial la revista *Cuadernos de Sociología* de Nicaragua, No. 11, sep-dic 1989, pág. 80.
- 6 Los resultados de las pláticas de los presidentes centroamericanos, así como los comentarios suscitados en el documento son señalados en la nota de Blanche Pietrich, en el periódico *La Jornada* del 12 de diciembre de 1989, pág. 28.
 - 7 Nos referimos al artículo "Crisis, ajuste y perspectivas de reactivación económica en Nicaragua", de Carlos M. Vilas, en la revista *Polémica*, San José (Costa Rica), FLACSO, 2a. época, núm. 9, sep-dic 1989, pág. 24.
 - 8 Véase el artículo de James Petras titulado: "La derrota electoral de los sandinistas: reflexiones críticas", aparecido en el suplemento *El Gallo Ilustrado*, periódico *El Día*, del 8 de abril de 1990, págs. 7-9.
 - 9 Los resultados de los votos en las elecciones de 1984, de acuerdo con las cifras del Consejo Supremo Electoral, pueden verse en la revista *Envío*, No. 41, noviembre de 1984.
 - 10 En el balance que hace Oscar René Vargas de los diferentes partidos políticos nicaragüenses, son interesantes sus consideraciones sobre el juego de fuerzas y grupos hegemónicos existentes en la UNO. Véase *Cuadernos de Sociología* de Nicaragua, No. 11, sep-dic 1989, págs. 105-107.
 - 11 Es interesante conocer el documento Santa Fe II. En él se destacan acciones dirigidas a los procesos electorales, particularmente el que se avecinaba en Nicaragua: "...los Estados Unidos continuarán enfrentando la exportación de la revolución nicaragüense en la década de los noventa. Una política de contención no será barata ni funcionará a largo plazo. Los Estados Unidos tendrán que apoyar la democratización de Nicaragua o si no, pagar exorbitantes costos para combatir la subversión en los países vecinos de Nicaragua.
"La política de democratización de Nicaragua requerirá de un desarrollo sofisticado de la doctrina del conflicto de baja intensidad. El aspecto más importante de este desarrollo estará en la educación de los medios de comunicación y del público norteamericano sobre la tendencia de los regímenes comunistas nacionales de Latinoamérica a subvertir a sus vecinos con el apoyo velado de la Unión Soviética". Documento de Santa Fe, reproducido en la revista *Envío* No. 90, dic-enero 1988-90, págs. 26-27.
 - 12 Los postulados de la campaña electoral aparecen en el número especial que sobre las elecciones en Nicaragua del 25 de febrero publicó la revista *Cuadernos de Sociología* No. 11, sep-dic 1989, págs. 80-88.
 - 13 Los resultados electorales de 1984 pueden consultarse en las cifras que dio el Consejo Supremo Electoral, publicados en la revista *Envío*, No. 41, nov. 1984.
 - 14 La plataforma política del FSLN también aparece en la revista *Cuadernos de Sociología*, págs. 10-19.
 - 15 El seguimiento de las dos campañas, durante los meses de enero y febrero de 1990, se hizo a partir del balance noticioso de los siguientes periódicos mexicanos y nicaragüenses: *El Día*, *La Jornada*, *El Nacional*, *uno más uno*, y *El Nuevo Diario y Barricada Internacional*.
 - 16 Véase el periódico *La Jornada* del 10 de febrero de 1990.
 - 17 El artículo de Miguel Concha. "Nicaragua: balance de un proceso electoral", muestra el papel que jugó el Consejo Supremo Electoral en las pasadas elecciones en Nicaragua. En *México-Internacional*, Año 1, No. 7, Marzo de 1990, págs. 11-12.
 - 18 En el periódico *El Día* del 14 de febrero de 1990.
 - 19 Los comentarios del presidente estadounidense aparecen en el diario *La Jornada* del 16 de febrero de 1990.
 - 20 Véase el artículo de Gregorio Selsler, *La Jornada*, 27 de feb. 1990. Pág. 29.
 - 21 En un artículo publicado en el periódico *El Día* del 5 de mayo de 1990, hicimos un breve análisis de la situación interna de la UNO antes de asumir el poder, sin embargo, aquí el balance es más amplio en cuanto a la participación de las distintas fuerzas de esta organización ya en el gobierno y en el poder legislativo.
 - 22 A unos días de que Daniel Ortega deja la presidencia, se legisló a toda marcha para asegurar algunos avances de la revolución sandinista. Los decretos pueden verse en *Barricada Internacional* del 7 de abril de 1990, págs. 5-7.
 - 23 Las cifras corresponden a datos oficiales de 1988 que proporcionamos en nuestro artículo relativo al movimiento obrero nicaragüense 1978-1988, publicado en el libro *Organización y luchas del Movimiento Obrero Latinoamericano*, Ed. Siglo XXI, México, 1988.
 - 24 En la concentración del primero de mayo se pudo observar cómo la Dirección del Frente Sandinista aprovechó dicho acto para hacer proselitismo contra el gobierno de Violeta Barrios viuda de Chamorro. Véase el periódico *El Día*, 2 de mayo de 1990.

